CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
16 NOV. 2022
RECIBIDO
Firma: Hora: 15:22 h.

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1137/2021-CR, que propone la "Ley de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol".

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor Presidente:

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el Proyecto de Ley 1137/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú, por iniciativa del señor congresista **José Enrique Jerí Oré**, que propone la Ley de fortalecimiento de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol.

Luego de la exposición y debate, en la Sétima Sesión Ordinaria de fecha 2 de noviembre de 2022, se acordó por mayoría aprobar el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1137/2021-CR, que propone la "Ley de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol"; con once (11) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, José Enrique Jerí Oré, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Diana Carolina Gonzales Delgado, en calidad de accesitaria de Alejandro Enrique Cavero Alva; seis (06) en contra, de los señores congresistas Guido Bellido Ugarte, Tania Estefany Ramírez García, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Jorge Carlos Montoya Manriquey, Isabel Cortez Aguirre y Carlos Antonio Anderson Ramírez; y cuatro (04) abstenciones, de los señores congresistas Juan Carlos Mori Celis, Silvia María Monteza Facho, Germán Adolfo Tacuri Valdivia y Noelia Rossvith Herrera Medina.

I. SITUACIÓN PROCESAL DE LA PROPUESTA

El **Proyecto de Ley 1137/2021-CR** ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 14 de enero de 2022, siendo decretado el 18 de enero de 2022 a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, como primera comisión dictaminadora, y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como segunda comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El **Proyecto de Ley 1137/2021-CR,** por el que se propone la Ley de fortalecimiento de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol, tiene por objeto dictar las medidas necesarias para fortalecer a las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol profesional, procurar el acceso a la inversión privada y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones deportivas. Asimismo, se propone dar el marco legal necesario a fin de que las organizaciones deportivas logren su sostenibilidad integral, así como establecer las reglas necesarias para viabilizar el pago y concluir satisfactoriamente los procesos concursales y post concursales, en condiciones de equidad, para todos los acreedores.

III. MARCO NORMATIVO

a. Constitución Política del Perú. Artículos 14, 107 y 195 inciso 8.
b. Reglamento del Congreso de la República. Artículos 67, 75 y 76.
c. Ley 26887, Ley General de Sociedades. Artículo 333.
d. Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal. Artículos 66, inciso 66.4 y 83, inciso 83.2
e. Ley 29504, Ley que promueve la transformación y participación de los clubes deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas abiertas. Segunda Disposición Transitoria.
f. Ley 29862, Ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú.
g. Ley 30064, Ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística.
h. Ley 30727, Ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol.
i. Ley 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú. Artículos 2 y 3.
j. Acuerdo Nacional. Segundo objetivo: Equidad y Justicia Social: Política de Estado 12: Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.

IV. OPINIONES SOLICITADAS

IV.1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

- Mediante Oficio Nº 974-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 04 de febrero de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Educación - MINEDU sobre el Proyecto de Ley 1137/2021- CR.

IV.2. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

- Mediante Oficio Nº 975-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 04 de febrero de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 1137/2021- CR.
- Mediante Oficio N° 1564-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 31 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía - MEF sobre el Proyecto de Ley 1137/2021- CR.

IV.3. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

- Mediante Oficio N° 1142-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 11 de febrero de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM sobre el Proyecto de Ley 1137/2021- CR.
- Mediante Oficio N° 1565-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR, de fecha 31 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM sobre el Proyecto de Ley 1137/2021- CR.

IV.4. FEDERACIÓN PERUANA DE FUTBOL

- Mediante Oficio N° 0425-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR, de fecha 20 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Federación Peruana de Futbol sobre el Proyecto de Ley 1137/2021- CR.

V. OPINIONES RECIBIDAS

V.1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

- Mediante Oficio N° 271-2022-MINEDU/DM, se remite el Informe N° 00486-2022-MINEDU/SG, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del MINEDU mediante el cual se considera que en atención al contenido del Proyecto de Ley 1137/2021-CR, *Ley de Fortalecimiento de las Organizaciones Deportivas dedicadas a la práctica del fútbol*, se concluye que **no le corresponde al Ministerio de Educación pronunciarse sobre la viabilidad del Proyecto de Ley N° 1137/2021-CR**; toda vez que la Federación Peruana de Fútbol -sobre cuyos afiliados recae los efectos de esta iniciativa- es una persona jurídica de derecho privado, con plena autonomía e independencia en materia deportiva, administrativa, económica, financiera, organizacional y de solución de controversias en los asuntos de su competencia, existiendo entre esta y el IPD, solo un vínculo de coordinación. Adicionalmente, cabe indicar que el Proyecto de Ley no asigna función, atribución o participación al IPD en las materias objeto de regulación.
- De otro lado, en el mismo oficio se da cuenta del Informe N° 214-2022-OAJ/IPD, el IPD concluyó que *"no resulta competente para pronunciarse sobre el Proyecto de Ley, precisando lo siguiente:*
    a. *El artículo 7 de la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, el IPD es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional (en adelante, SISDEN), constituye un organismo público ejecutor adscrito al MINEDU, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones; asimismo, formula e imparte la política del deporte en general y, por ende, de cada uno de sus componentes, por lo que organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza en el ámbito nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías, como componentes del deporte en general.*

        (…)

    d. *Si bien el IPD se constituye como el ente rector del SISDEN, no ejerce rectoría sobre la disciplina deportiva del fútbol profesional, recayendo ésta en la FPF, la cual tiene plena autonomía en materia deportiva, administrativa, económica,*

financiera, organizacional, rigiéndose únicamente por sus propios estatutos, y los estatutos, reglamentos y decisiones de sus organismos internacionales."

V.2. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

- Mediante Oficio N° D001034-2022-PCM-SG, se remite el Informe N° D000609-2022-PCM-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el cual se considera que el Proyecto de Ley 1137/2021-CR, Ley de Fortalecimiento de las Organizaciones Deportivas dedicadas a la práctica del fútbol, resulta **no viable**.

V.2.1 INDECOPI (Por disposición de la PCM)

- Mediante Oficio N° 000205-2022-GEG/INDECOPI, se remite el Informe N°219-2022-OAJ/INDECOPI de la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales y la Oficina de Asesoría Jurídica del INDECOPI, mediante el cual se concluye que a consideración de la Oficina de Asesoría Jurídica, la propuesta contenida en el artículo 5 del Proyecto de Ley N° 1137/2021-CR no es compatible ni conducente con la naturaleza, objetivo, finalidad y principios que rigen el Sistema Concursal peruano conforme a las disposiciones de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal, por los fundamentos desarrollados en el presente Informe, por lo que emite **opinión desfavorable respecto de dicha propuesta**.

V.3. OTRAS OPINIONES RECIBIDAS

- Mediante Oficio N° 000205-2022/JKUM-CR, la congresista JHAKELINE KATY UGARTE MAMANI, traslada opinión institucional al proyecto de Ley Nº 1137/2021 – CR, Ley de fortalecimiento de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol, alcanzada por el Club Universitario de Deportes, el cual concluye que **el proyecto de ley "generará impacto positivo para el deporte sobre todo a nivel económico, social y de salud", y que resulta altamente favorable para el futbol profesional, pues recoge criterios objetivos de desarrollo.**

VI. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

VI.1 ANÁLISIS TÉCNICO

a. Del objeto y finalidad de la iniciativa legislativa: la sostenibilidad en el largo plazo de las organizaciones deportivas dedicadas al fútbol

La propuesta legislativa, bajo análisis, tiene por objeto dictar las medidas necesarias para fortalecer a las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol profesional, a fin de promover la sostenibilidad integral de largo plazo de las organizaciones deportivas, comprendiendo sus aspectos deportivos, económicos, financieros, institucionales y sociales, así como la mejora de su competitividad a nivel nacional e internacional; procurar el acceso a la inversión privada y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones deportivas; brindar el marco legal necesario a fin de que las organizaciones deportivas, con el objeto de lograr su sostenibilidad integral, efectúen las acciones que les permitan mantener la condición de asociaciones civiles sin fines de lucro o, alternativamente, opten por transformarse en sociedades anónimas por acuerdo de sus respectivas asambleas de socios; y establecer las reglas necesarias para viabilizar el pago y concluir satisfactoriamente los procesos concursales y post concursales, en condiciones de equidad, para todos los acreedores en aquellas organizaciones deportivas en cuyos respectivos procesos concursales se encuentren pendientes de cancelación de créditos tributarios a favor del Estado.

En el Perú ha habido una serie de medidas legislativas que datan del año 2010 destinadas al reforzamiento de la actividad futbolística, la última de las cuales se ha dado con la promulgación de la Ley 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú. Esta norma prescribe la necesidad de generar un nuevo marco legal, siendo indispensable establecer en primer lugar cuál es la importancia pública de la actividad futbolística, los impactos beneficiosos que puede generar para la economía y la sociedad y, cuáles son las medidas legislativas que legítimamente puede adoptar el Estado para apoyar a este deporte.

b. Aproximación al impacto de la práctica del futbol en la economía y sociedad peruana: un análisis comparativo a la luz de la experiencia internacional

Sin embargo, en el Perú carecemos de estudios actuales, fiables y completos sobre el impacto de la práctica del futbol en la economía y en la sociedad peruana. El estudio más completo sobre el estado del fútbol peruano fue desarrollado por la firma APOYO CONSULTORÍA en el año 2004 por encargo de la Federación Peruana de Fútbol. Asimismo, se cuenta con una serie de estudios con énfasis en los aspectos sociológicos de las barras de fútbol y determinadas tesis académicas y artículos en distintos medios de comunicación que abordan aspectos puntuales de distinta naturaleza.

Adicionalmente, cabe indicar que los principales actores institucionales (la Federación Peruana de Futbol Profesional y la Asociación Deportiva de Futbol Profesional) no cuentan con bases de datos que sean de público acceso a fin de medir la evolución en la asistencia a los estadios de fútbol, las preferencias de la población en cuanto a su identificación con la práctica de este deporte (incluyendo preferencias específicas por determinados equipos), la inversión y los ingresos consolidados en esta actividad, así como otros indicadores.

No obstante, la evidencia empírica, como lo demuestran los usuarios de los medios de comunicación televisivos, radiales, plataformas digitales y redes sociales, así como la dedicación de los citados medios al seguimiento de este deporte demuestran que se trata de un deporte de la máxima preferencia de la población y de un asunto de relevancia nacional, conforme lo demostró la participación de la selección peruana de fútbol en las últimas eliminatorias que determinaban la clasificatoria a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Para llenar este vacío de información, corresponde recurrir a la experiencia comparada, como en la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la cual desarrolló un modelo de medición y análisis del retorno social a la inversión en el futbol (SROI)-siglas en inglés, a través de un programa denominado "GROW", que viene siendo aplicado al análisis de las cincuenta y cinco federaciones nacionales europeas y tomando como referencias las bases estadísticas de los datos de la Unión Europea, de los cuales a la fecha dicho modelo fue aplicado a veintiocho países europeos en los que se han identificado un total de nueve millones y medio de futbolistas registrados.

El valor combinado de los beneficios identificados se cifra en € 45,647 millones (cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y siete millones de euros) entre beneficios económicos, sociales y sanitarios, conforme se resume a continuación:

Entre los beneficios económicos se cuenta los ingresos de la actividad, la inversión en infraestructura, el gasto en operaciones y la creación de empleos, incluyendo el pago de sueldos, salarios y pagos a proveedores. A este respecto, se identifican beneficios por valor de € 12,778 millones (doce mil setecientos setenta y ocho millones de euros).

En cuanto a los beneficios sociales se encuentra el impacto en Educación (aumento del nivel educativo, reducción de la deserción escolar y el desarrollo de programas y proyectos a nivel comunitario). En este aspecto los beneficios producidos se cifran en € 12,719 millones (doce mil setecientos diecinueve millones de euros).

En materia de salud, los beneficios identificados comprenden el impacto en la reducción de enfermedades crónicas físicas (coronarias, diabetes 11, distintos tipos de neoplasias), como mentales (demencia, esquizofrenia, depresión y ansiedad), el envejecimiento y la sensación de bienestar. En este aspecto, los beneficios cuantificados ascienden a € 18,150 millones (dieciocho mil ciento cincuenta millones de euros)[1].

Dicho flujo de beneficios se observa con un aumento de las principales fuentes de ingresos de los equipos de fútbol europeo, tanto de las tradicionales como de aquellas que han resultado de la penetración de las tecnologías de información y comunicación y el surgimiento de equipos "globales" (cuyas "hinchadas" y consumo de productos de mercadeo superan a sus hinchadas nacionales) lo que puede graficarse en las siguientes cifras (previas al impacto del Covid-19):

Los ingresos de las cinco principales ligas de fútbol de Europa (Italia, España, Francia, Alemania e Inglaterra) han crecido a un ritmo de 10% anual para alcanzar un ingreso combinado en el año 2019 de € 9,500 millones (nueve mil quinientos millones de euros).
De tales ingresos, el rubro de los ingresos por derechos de transmisión televisiva de los equipos lideres representa el 44%, seguido por los ingresos comerciales con un 40% en tanto que la venta de tickets para el día de partido representa el 16% de los ingresos.

El valor de capitalización por equipo ha crecido al mismo ritmo: por citar un ejemplo, el valor del Juventus (siempre antes de la pandemia Covid-19) era de € 1,512 millones, el del

[1] The UEFA Grow SROI Model. Valuing the Impact of Football Participation in Europe. Recuperado de internet: https: /www.knvb .ni/downloads/bestand/26276/ uefa-sroi-final-report.

Manchester United era de € 3,808 millones, en tanto que el valor del Real Madrid era de € 4,239 millones.

El valor de las transferencias de jugadores realizadas ascendió en 2019 a € 6,600 millones, con un incremento acumulado de 340% respecto de los cinco años anteriores[2].

Este patrón de crecimiento va de la mano con mejoras continuas en el modelo de negocios del fútbol, que depende cada vez menos de sus fuentes tradicionales. Por ejemplo, hoy en día existen diversos negocios relacionados con la explotación de la marca, tales como los derechos de imagen los futbolistas, el desarrollo de programas para los socios, programas de licencias, entre otros[3].

Ahora bien, la consecuencia práctica se ha traducido en un incremento sostenido del predominio de los equipos europeos versus los equipos latinoamericanos. La última vez que un equipo latinoamericano ganó una copa mundial fue en el Mundial de Corea-Japón 2002. Desde entonces, han sido equipos europeos: Italia, España, Alemania y Francia. Así, en el Ranking FIFA de noviembre 2021, únicamente Brasil (2°) y Argentina (5°) se ubicaron entre las diez primeras selecciones del mundo[4].

Si bien es cierto que el Covid-19 ha tenido un impacto directo en el desempeño económico de los clubes de futbol europeos, cabe destacar que la cifra de negocio total de los veinte principales equipos de futbol en Europa sigue siendo impactante: € 8,200 millones en el año 2020, a pesar de la pérdida de ingresos por el cierre de la asistencia a los estadios y el diferimiento de competiciones[5].

Todas estas tendencias e indicadores permiten sostener que un mayor volumen de negocio de los equipos de futbol está asociado a un incremento de los beneficios económicos y sociales para el país y todo ello, a su vez, a un mejor desempeño deportivo a nivel internacional, generándose así un ciclo continuo de retroalimentación positiva.

---

[2] Reikin, V(2021). " Financial and Economic Aspects of Professional Football Industrv: Trend Ana lysis and Development Prospects" En: Financial and Credit Activities : Theory and Practice. Año 2021, N° 01 p. 471- 480).
[3] García Vega, H (2011). "Un acercamiento al Deporte y al Futbol como Negocio y el Funcionamiento. Problemática y Mejora del Futbol Peruano". En: Journal of Business, Universidad del Pacífico, 2011, Vol. 3(2) p.79 - 107.
[4] Recuperado de internet Ranking FIFA de fecha 19 noviembre de 2021: https://wwvv.fifa.com/es/fifa-world- ranking/men?dateId=id 1347 1 (revisado 29/11/2021).
[5] Deloitte Business Sport Group (2021). "Testing Times. Football Money League. January 2021". Recuperado de internet: https://www2 .deloitte.com/uk/en/pages/sports-business -group/articles/deloitte-footbal1 -money-league. htm 1

Por ende, la experiencia internacional justifica rotundamente la intervención legislativa del Estado para resolver las fallas del mercado que vienen imposibilitando que este potencial se manifieste plenamente en nuestra sociedad.

En tal sentido, también se hace necesario evaluar los resultados de las medidas legislativas dictadas a la fecha, en especial las que crearon el régimen de intervención y procedimiento especial concursal, próximo a cumplir diez años de vigencia.

c. La experiencia de las medidas de reestructuración y apoyo de emergencia a la actividad deportiva futbolística en el Perú

Ahora bien, en el contexto nacional la actividad de fútbol en el Perú con la promulgación del Decreto de Urgencia Nº 010-2012, Medidas de Urgencia para la reestructuración y apoyo de emergencia a la actividad deportivo futbolística, se pretendió corregir la grave situación económica y financiera en la que se encontraba la casi totalidad de equipos de fútbol profesional en el año 2012 y respecto de los cuales el Estado había devenido en el principal acreedor global dado el impago de los tributos, bajo administración de la SUNAT en que habían incurrido dichas instituciones deportivas.

Esta norma creó un procedimiento concursal especial al cual podían acogerse voluntariamente los clubes de fútbol. Una vez acogida la solicitud, el INDECOPI quedaba facultado para designar un Administrador Temporal entre las entidades administradoras de deudores insolventes registradas ante dicha institución. Al mismo tiempo, se iniciaba el procedimiento de reconocimiento regulado por la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal.

El Decreto de Urgencia N° 010-2012 fue derogado por la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley 29862, Ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, no obstante, lo cual se ratificaron todos los actos ejecutados durante su vigencia. Fundamentalmente, tales actos consistieron en el acogimiento al régimen especial concursal, por parte de cinco clubes deportivos (Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sport Boys del Callao, FBC Melgar de Arequipa y Cienciano del Cusco) en todos los cuales la SUNAT adquirió una posición especialmente relevante como acreedor tributario.

El referido régimen fue complementado con la promulgación de la Ley 30064, Ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística, y

su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 125-2013-PCM, generando un marco legal bajo el cual el Estado debía lograr la cancelación de las acreencias tributarias y no tributarias mediante diversos mecanismos.

Uno de los mecanismos consistía en la transformación de los clubes deportivos de la figura de asociaciones civiles a sociedades anónimas abiertas con la finalidad de permitir la captación de capital. Igualmente, con el objeto de mejorar la gestión de dichos clubes, se promovió la celebración de contratos de gerencia o de concesión deportiva con entidades especializadas que debían registrarse previamente ante la Superintendencia del Mercado de Valores.

Para el caso de los clubes concursados, se proponía transferir sus activos a nuevas sociedades denominadas "sociedades receptoras" en los que el Estado capitalizaría sus acreencias, recibiendo a cambio acciones de tales sociedades. Posteriormente, se dispuso que dichas acciones sean materia de subasta pública a través de PROINVERSION, lo cual nunca se efectuó.

En el caso de los demás acreedores, al igual que el Estado, estos verían protegidos sus derechos mediante la aprobación y ejecución oportuna de planes de reestructuración de largo plazo, pudiendo optar también por la capitalización de sus acreencias en las nuevas sociedades receptoras.

En tal sentido, se pretendía replicar los procesos seguidos en México con la conversión del Club Pachuca, en Chile con las conversiones y cotización en Bolsa de Valores de los equipos Colo Colo y Universidad de Chile, y en Colombia respecto de veinticuatro (24) clubes de fútbol.

Transcurridos diez años desde la instauración de dicho régimen, de los cinco clubes intervenidos sólo en dos casos se ha verificado la cancelación del total de la deuda tributaria (FBC Melgar de Arequipa y Alianza Lima) y la cancelación parcial de acreencias en un equipo (Cienciano del Cusco), pero en dichos casos no se han cancelado el total de las acreencias, principalmente las acreencias laborales y previsionales, en tanto que en otros dos equipos (Universitario de Deportes y Sport Boys) la deuda permanece impaga, habiéndose incrementado en el tiempo.

De igual modo y como se refiere en la sección siguiente, el marco normativo no se ha implementado ni operativizado; es decir, no se ha producido la migración del modelo asociativo tradicional al de sociedad anónima abierta ni se ha producido el ingreso de los clubes de futbol al mecanismo de cotización bursátil.

De hecho, la cancelación de las acreencias tributarias de titularidad del Estado se ha producido mediante un mecanismo no previsto en las normas legales antes mencionadas, que ha sido el de la venta directa de tales deudas a inversores privados por parte de la SUNAT, manteniéndose vigente sus respectivos procedimientos concursales.

d. Situaciones que afectan la sostenibilidad integral de la actividad futbolística en el Perú

Ala luz de la experiencia descrita, se pueden identificar tres situaciones que afectan la sostenibilidad integral de la actividad futbolística en el Perú y que se reseñan a continuación.

La primera situación consiste en el presunto abuso de ley de los mecanismos administrativos y judiciales que los acreedores de los clubes concursados tenían para la protección de sus derechos.

El caso más representativo lo constituye el Club Universitario de Deportes, motivando la realización de un denominado "mega operativo" por parte de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del INDECOPI que permitió el análisis de noventa y nueve (99) conductas presuntamente prohibidas y la consecuente apertura de cincuenta y siete (57) procedimientos administrativos sancionadores.

Entre tales conductas se cuenta la no entrega de inmuebles de propiedad del club, la omisión de declaración de ingresos producidos por publicidad que debieron compensarse contra acreencias concursales, la omisión en la entrega de ingresos que correspondían al Club, la ejecución de pagos cuya cancelación no correspondía y la omisión en el cumplimiento de funciones.

Muchas de estas conductas han sido ventiladas abiertamente en la prensa y plataformas sociales y se han traducido en hechos penosos, sin contar la multiplicación de procesos judiciales y administrativos, incluso de índole penal, irrogando gastos de los recursos del Estado y un deterioro de la percepción de la ciudadanía respecto de sus instituciones.

Resulta lógico inferir que esto también ha tenido un impacto muy negativo en la percepción de riesgos legales y reputacionales por parte de potenciales inversores, auspiciadores y potenciales socios de negocios, lo que, a falta de estudios serios, puede explicar en gran medida la escasa capitalización y valor del fútbol como actividad económica en el Perú.

La segunda situación consiste en el crecimiento marginal del fútbol como actividad económica.

Al inicio del proceso de intervención concursal especial no se tenía una cifra confiable que permitiese establecer el volumen del negocio del fútbol profesional en el Perú.

Siguiendo a determinados estudios basados en entrevistas y declaraciones de ejecutivos y expertos en materia de futbol, el valor de este negocio en el año 2011 era de USD 40 millones, correspondiendo el 60% de este monto a los ingresos provenientes a la cesión de derechos de transmisión televisiva de los partidos de futbol profesional; el 25% a los auspicios comerciales; 10% al ingreso por taquillas y 5% a la cesión de jugadores a otros clubes[6].

En el año 2013 se produjo un proceso generalizado de renegociación de los contratos de cesión de derechos televisivos sobre el cual no se tienen datos consolidados. De acuerdo a los documentos disponibles, los contratos celebrados en dicho momento fijaron un plazo de vigencia de diez años, con un incremento inicial hecho efectivo en la fecha de firma y aumentos anuales.

Con relación a las demás fuentes de ingresos típicas (asistencia a los estadios, ingresos por la cesión de jugadores y auspicios), desde el inicio de la intervención concursal especial de los equipos de fútbol la poca información disponible muestra una escasa concurrencia, incluso para los equipos "punteros".

En efecto, en los años 2012 a 2018, los equipos Universitario de Deportes, Alianza Lima, FCB Melgar, Sporting Cristal, Cienciano y Sport Boys disputaron por año cuarenta y cuatro (44) partidos. Tomando en cuenta los cuatro equipos que permanecieron en la Primera División en dicho periodo, la mayor concurrencia alcanza un pico por partido de 10,368 personas y la menor asistencia registrada es de 5,954 personas[7].

---

[6] García Vega, H (2011). "Un acercamiento al Deporte y al Futbol como Negocio y el Funcionamiento. Problemática y Mejora del Futbol Peruano". En: Journal of Business, Universidad del Pacífico, 2011, Vol. 3(2) p. 95

[7] Recuperado en internet: https//elbocon.petfutbol-peruano/descentralizado/alianza-lima-mas-taquillero-

Otras fuentes de datos resultan de los análisis internacionales sobre el valor de cada liga de futbol profesional basada en el seguimiento del mercado de transferencias de jugadores y el valor estimado que se le asigna a cada jugador.

Así, el portal TransferMarkt.es estima que el valor total de la Liga peruana sería de € 126 millones (es decir, cerca de 580 millones de soles, al cambio actual) y que es sensiblemente inferior al de sus pares latinoamericanos[8].

Al analizar el valor de mercado de los equipos que ingresaron al Procedimiento Concursal Especial el equipo mejor ubicado es precisamente es uno que no está sometido a procedimiento concursal (Sporting Cristal en la posición 77 del ranking de la CONMEBOL), en tanto que los demás equipos concursados han visto severamente deteriorada en tal ranking[9].

En tal sentido, consideramos necesario hacer la reserva que la valorización de la Liga 1 o de un equipo en particular basado en el valor total de sus jugadores no resulta un criterio adecuado. En efecto, no permite entender cuál es su capacidad real de generación de caja ni consecuentemente medir el impacto multiplicador en la economía del club.

Hecha esta precisión puede afirmarse, sin lugar a dudas, que luego de diez años de iniciarse el régimen especial de intervención concursal encontramos que el fútbol profesional en el Perú continúa teniendo un volumen de negocio altamente dependiente de una fuente de ingresos (la cesión de derechos televisivos) y cuya cuantía resulta diminuta en comparación con la dimensión de los mercados latinoamericanos y europeas.

Estas dos características están fuertemente correlacionadas con el desempeño declinante y errático de los equipos de futbol profesional del Perú en competencias internacionales, como se verá en el punto siguiente.

La tercera situación consiste en el pobre desempeño de los equipos de futbol, tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales.

---

ultimos-1 O-a nos-asi-quedo - la-tabla-179091 / (revisado 27/11/2021).
[8] Recuperado de internet: https://www.transfermarktesfwettbewerbe/amerika
[9] Recuperado de internet: https://www.transfermarkt.es/ (Revisión información por club, con fecha 27/11/2021)

A nivel de selecciones nacionales y hasta el momento de iniciarse el régimen de intervención concursal especial el desempeño del futbol profesional a nivel de selecciones de mayores registraba tres participaciones en los mundiales de 1970, 1978 y 1982 y la obtención de la Copa América en su edición de 1975.

En cuanto a las competencias internacionales por los clubes de fútbol, hasta antes del inicio del régimen concursal especial el mejor desempeño de éstos se resume en los subcampeonatos de la Copa Libertadores del año 1972 por parte del Club Universitario de Deportes y en el año 1997 por parte del Club Sporting Cristal, así como también los logros de la Copa Sudamericana en el año 2003 y la Recopa Sudamericana en el año 2004 por parte del Club Cienciano del Cusco.

A partir del inicio del régimen especial concursal únicamente el Club Sporting Cristal pudo lograr pasar hasta fases finales (Cuartos de final) en la edición de la Copa Sudamericana 2021[10].

Cabe señalar que la participación de los equipos peruanos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana resultan esenciales para sus finanzas. Para ilustrar lo dicho, en el año 2020, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal obtuvieron ingresos por USD 3 millones, USD 850 mil y USD 500 mil, respectivamente, por su participación en la Copa Libertadores, mientras que FBC Melgar de Arequipa obtuvo USD 675 mil por su participación en la Copa Sudamericana[11].

Es importante resaltar que estos ingresos aumentan de manera directa por cada fase que logran avanzar los equipos, algo que los equipos peruanos no logran concretar en los últimos años, a excepción de la destacada participación del FBC Melgar de Arequipa en la Copa Sudamericana de este año 2022.

[10] Cabe señalar que, adicionalmente de los clubes analizados, el club César Vallejo alcanzó los Cuartos de Final en la Copa Sudamericana 2013.
[11] CONMEBOL. Memoria Anual 2020. p. 20–21 y p.24 - 25

Por el contrario, el comportamiento de los equipos de fútbol sometidos al procedimiento concursal ordinario en los últimos 10 años ha sido oscilante, tomando en cuenta la información estadística del portal Football Data Base, la cual también ha incluido a un equipo no sometido a concurso (Sporting Cristal)[12].

Otro aspecto relevante se refiere al cumplimiento de las reglas de *fair play* establecidas por la Federación Peruana de Fútbol en el año 2016. Nuevamente se advierte que el sometimiento al procedimiento concursal especial no ha generado un cambio positivo en el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol.

Finalmente, cabe indicar que en los casos de los equipos concursados un fenómeno recurrente y penoso es la penalización (pérdida de puntos en los campeonatos nacionales) por el no cumplimiento de sus obligaciones económicas y financieras asociadas al licenciamiento deportivo.

VI.2. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO

La propuesta legislativa se presenta, teniendo como marco lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, que en su *artículo 14 señala: "La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad (...)".*

Así también en su artículo 195, inciso 8 señala que: *"Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para: (...)*

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo,

[12] FootballDataBase es un portal creado en el año 2007 de propiedad del grupo Sport360° . La información ha sido recuperada del siguiente enlace de internet: https://footballdatabase .com/clubs-list-country/peru

circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley".

En tal sentido, la propuesta legislativa se encuentra en concordancia por lo dispuesto en nuestro texto constitucional.

El *artículo 333 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades,* trata sobre los casos de transformación, mediante el cual dispone que *las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú.* [...]. En tal sentido, también se encuentra acorde con la presente propuesta legislativa.

De igual manera, la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, en su artículo 66 sobre el *contenido del Plan de Restructuración*, en su inciso 66.4 dispone que *en el cronograma de pagos se deberá precisar, bajo sanción de nulidad del Plan, que de los fondos o recursos que se destinen al año para el pago de los créditos, por lo menos un 30% se asignará en partes iguales al pago de obligaciones laborales que tengan el primer orden de preferencia* [...] y en su artículo 83 respecto de las *atribuciones, facultades y obligaciones del Liquidador,* en su inciso 83.2 *señala que son atribuciones y facultades del Liquidador: a) Actuar en resguardo de los intereses de la masa o del deudor, en juicio o fuera de él, con plena representación de éste y de los acreedores; b) Disponer de los bienes muebles e inmuebles, acreencias, derechos, valores y acciones de propiedad del deudor. Para estos efectos, el Convenio podrá exigir valuación económica y subasta pública judicial o extrajudicial; c) Celebrar los actos y contratos necesarios con el objeto de conservar, mantener y asegurar los bienes del deudor, con conocimiento previo de la Junta de Acreedores, del Presidente de la referida Junta o del Comité si lo hubiere; d) Celebrar los contratos que fuesen necesarios y transigir y realizar, con garantías o sin ellas, las operaciones de créditos estrictamente necesarias para cubrir los gastos y obligaciones que demande la liquidación, con conocimiento de la Junta de Acreedores, del Presidente de la referida Junta o del Comité si lo hubiere. Dichos actos sólo podrán ser realizados con empresas del sistema financiero; e) Cesar a los trabajadores del deudor; f) Ejercer todas las funciones y facultades que conforme a la Ley General de Sociedades corresponde a los liquidadores, administradores y gerentes, así como las que adicionalmente le otorgue el Convenio de Liquidación o la Junta; g) Solicitar el levantamiento de las cargas y gravámenes que pesen sobre los bienes del deudor, siendo título suficiente*

para esto la presentación del contrato de transferencia y el Convenio de Liquidación debidamente inscrito en los Registros Públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78; y h) Formular las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público si constatara la existencia de elementos que hicieran presumir la comisión de actos dolosos o fraudulentos en la administración del deudor, o que podrían dar lugar a la quiebra fraudulenta de la misma, según la regulación contenida en el Código Penal, lo que deberá ser puesto en conocimiento de la Junta. A excepción de lo dispuesto por el literal d) del referido artículo. Cabe señalar que la presente norma regula obligatoriamente a los procedimientos concursales de los deudores que se encuentren domiciliados en el país, sin admitir pacto en contrario, los cuales se encuentran suspendidos para efectos de la aplicación de la presente norma, *de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú*. En tal sentido, el referido texto legal también resulta concordante con la propuesta legislativa.

De otro lado, *la Ley 29504, Ley que promueve la transformación y participación de los clubes deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas abiertas, en su Segunda Disposición Transitoria* trata sobre las deudas tributarias de los clubes de fútbol profesional disponiendo el fraccionamiento y el pago de las deudas de naturaleza tributaria y no tributaria, bajo administración de la SUNAT y los gobiernos locales. Asimismo, establece en el numeral 6 de la referida disposición transitoria la tasa de interés moratorio aplicable para estos conceptos. *Lo cual también se encuentra acorde con la normativa propuesta.*

Cabe señalar, que *la Ley 29862, Ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, y la Ley 30064, Ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística, se encuentran suspendidas* para efectos de la aplicación de la presente norma, *de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú. En tal sentido, la presente propuesta legislativa se encuentra acorde con la legislación actual.*

La presente propuesta legislativa *enmarca su contenido en lo dispuesto en la Ley N°30727, Ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol,* considerando lo dispuesto por la normativa deportiva nacional e internacional.

En tal sentido, *la propuesta legislativa no contraviene la Constitución Política del Perú y guarda concordancia con los dispositivos legales citados, por cuanto resulta una norma para la mejora de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol, como los clubes profesionales de fútbol, de esta manera, se incentivará la práctica sana de esta disciplina deportiva, con impactos evidentes en la mejora de la salud de la población y el cultivo de buenos hábitos y valores en la niñez, adolescencia y juventud, todo ello a partir de la mayor captación y gestión de recursos privados para la mejora de los mismos, en cuanto a infraestructura deportiva, utilización de laboratorios tecnológicos y ciencias aplicadas al fútbol, recuperación económica institucional, pago de las deudas y acreencias al Estado peruano, así como también la mejora de la competitividad deportiva a nivel nacional e internacional, a través de la repotenciación de las categorías menores y descubrimiento de futuros talentos que defiendan nuestra camiseta nacional en sus diferentes categorías.*

Finalmente, *la propuesta legislativa también se encuentra acorde con el Acuerdo Nacional y sus políticas de Estado.* Considerando al Segundo objetivo: Equidad y Justicia Social, el cual comprende la Política de Estado 12: Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.

VII. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA NORMA PROPUESTA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Del análisis y revisión de la normatividad vigente se evidencia que, con la aprobación de la presente propuesta legislativa no se contraviene ninguna disposición legal de nuestro ordenamiento jurídico, sino, más bien se guarda concordancia y se complementa lo normado por la Constitución Política del Perú y por los dispositivos legales antes citados.

En cuanto al impacto de la norma propuesta en la legislación vigente, dicha propuesta legislativa cumple con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, conforme a lo cual debe darse un nuevo marco legal que regule de manera integral el desarrollo de la actividad deportiva de los clubes de fútbol profesional, bajo los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y buena fe.

Además, que extiende la suspensión de los efectos de las leyes 29862, Ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, y 30064, Ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva

futbolística, incluyendo también la suspensión a la Ley 29504, Ley que promueve la transformación y participación de los clubes deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas abiertas, así como de sus normas complementarias.

Dicha suspensión se explica por la imposibilidad material y legal en que se encuentra una parte sustancial de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol de cumplir con varias de las disposiciones contenidas en las citadas normas. Concretamente, en el caso de la Ley 29504, Ley que promueve la transformación y participación de los clubes deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas abiertas, y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2010-ED, se trata de la exigencia de contar con un patrimonio mínimo equivalente a doscientas unidades impositivas tributarias, adoptar decisiones sobre la conversión a sociedades anónimas o el mantenimiento de su condición de asociaciones civiles sin fines de lucro y constituir los denominados "fondos de deporte de fútbol profesional".

En el caso de la Ley 30064, Ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística, y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 125-2013-PCM, a la fecha no se ha implementado las disposiciones aplicables a la valorización y capitalización de las acreencias tributarias y no tributarias de titularidad del Estado y la emisión y transferencia a favor de terceros de las acciones emitidas al amparo de tales dispositivos legales

Cabe señalar que, conforme a las normas citadas, tales acciones debieron ser objeto de subasta pública a través de PROINVERSION, bajo el mecanismo previsto en el Decreto Legislativo N° 674, que aprueba la Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado, y demás normas reglamentarias y complementarias, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha.

De otro lado, en la búsqueda de mecanismos que incentiven la inversión en infraestructura deportiva y fortalezcan la capacidad operativa de las organizaciones deportivas es claro que existen y puede autorizarse su utilización excepcional, opciones de pago de deudas tributarias, que permiten logar el resultado final del objeto de un impuesto ser devuelto a la comunidad en la forma obra o servicio público. En ese sentido, el mecanismo de Obras por Impuestos es una oportunidad para que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura existente en el país, ya que mediante este

mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan.

Finalmente, la aprobación de la presente propuesta legislativa implicaría simplificar el marco legal vigente, conservando las innovaciones introducidas por las normas materia de suspensión, pero sin que éstas obstaculicen la inmediata aplicación de medidas de urgente implementación, como en el caso de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol en situación concursal a que se refiere la Ley 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, las mismas que se han visto severamente impactadas financieramente como consecuencia de la Pandemia Covid-19.

VIII. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

La propuesta legislativa no genera costo demanda de recursos financieros al erario nacional, por el contrario, se espera que su implementación genere una serie de impactos económicos y financieros benéficos de gran envergadura para las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol.

En primer lugar, la iniciativa promueve la canalización de la inversión privada en el mejoramiento, ampliación y creación de la infraestructura deportiva de titularidad pública mediante esquemas legales de colaboración pública. Con dichas inversiones, se espera mejorar la competitividad del futbol profesional a nivel nacional e internacional, generando una serie de impactos en diversas actividades económicas asociadas directa e indirectamente con dicha disciplina, produciendo un aumento en la recaudación de los tributos generados a favor del Estado.

En segundo lugar, la iniciativa dota de un marco legal transparente y predecible, así como la activación del mecanismo legal previamente establecido por la Segunda Disposición Transitoria de la Ley 29504, Ley que promueve la transformación y participación de los clubes deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas abiertas, para el fraccionamiento y pago de las deudas de naturaleza tributaria y no tributaria, bajo administración de la SUNAT y los gobiernos locales.

En tercer lugar, la propuesta legislativa permite que las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol adopten formas societarias que otorguen garantías adecuadas para su fortalecimiento patrimonial, permitiendo que las inversiones sean realizadas en su infraestructura, la formación de menores, los laboratorios de tecnología y ciencias aplicadas y el pago de sus costos y los gastos de operación debidamente gestionados a través de estructuras transparentes, sujetas a las normas del buen gobierno corporativo, de integridad y de cumplimiento.

En ese sentido, en el texto sustitutorio que se ofrece se propone mejorar la capacidad de inversión de las organizaciones deportivas, abriendo la posibilidad de manera explícita, a que estas puedan realizar inversiones en infraestructura, en el marco de la normatividad vigente relativa a concesiones y obras por impuestos, con el doble impacto, benéfico, en este último caso, en que podría no sólo fomentar la inversión directa en infraestructura deportiva, sino facilitar el cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario y no tributario que puedan generar las actividades de dichas organizaciones.

En cuarto lugar, la presente norma permitiría concluir con una serie de acciones administrativas y judiciales cuyos costos e impactos han sido notoriamente perjudiciales para todos los actores involucrados en la práctica del fútbol profesional, los cuales han venido irrogando considerables recursos al Estado y a los órganos de administración de justicia.

Finalmente, consideramos se considera que la propuesta legislativa mejorará la percepción del fútbol como una práctica deportiva sana, con impactos evidentes en la mejora de la salud de la población y el cultivo de buenos hábitos y valores en la niñez, adolescencia y juventud, todo ello a partir de la mayor captación y gestión de recursos privados.

IX. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, recomienda de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 70° del Reglamento del Congreso de la República, la **APROBACIÓN** del Proyecto de Ley 1137/2021-CR con el siguiente **Texto Sustitutorio:**

LEY DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEDICADAS A LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto dictar las medidas necesarias para fortalecer a las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol profesional, a fin de lograr los siguientes objetivos:

a) Procurar el acceso a la inversión privada y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones deportivas, en concordancia con los fines y objetivos institucionales previstos en sus estatutos sociales;

b) Brindar el marco legal necesario a fin de que las organizaciones deportivas, con el objeto de lograr su sostenibilidad integral, efectúen las acciones que les permitan mantener la condición de asociaciones civiles sin fines de lucro o, alternativamente, opten por transformarse en sociedades anónimas por acuerdo de sus respectivas asambleas de socios; y,

c) Establecer las reglas necesarias para viabilizar el pago y concluir satisfactoriamente los procesos concursales y post concursales, en condiciones de equidad, para todos los acreedores en aquellas organizaciones deportivas en cuyos respectivos procesos concursales se encuentren pendientes de cancelación de créditos tributarios a favor del Estado.

Artículo 2. Organización deportiva

Las organizaciones deportivas a las que se refiere la presente ley son aquellas de nivel profesional que deben cumplir estrictamente con todas las normas deportivas nacionales e internacionales que les resulten aplicables, conforme a la regulación de la FIFA, CONMEBOL y la ley 30727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Nacional Deportiva Peruana de Fútbol.

Artículo 3. Sostenibilidad de las organizaciones deportivas

3.1 Las organizaciones deportivas implementan todas las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad integral de conformidad con las normas deportivas nacionales e internacionales correspondientes y aplicables en el Perú, debido al impacto y beneficios para la sociedad en su conjunto.

3.2 Las organizaciones deportivas, actuando de forma individual o conjunta, están facultadas para:

a) Implementar plataformas de recursos compartidos de planeamiento y gestión financiera, administrativa, legal y deportiva, creando y fortaleciendo capacidades gerenciales, diseminando conocimiento y generando economías de escala, sin que se les pueda imputar la existencia de prácticas anticompetitivas;

b) Promover ante el Estado propuestas de proyectos de financiamiento, ampliación, mejoramiento, fortalecimiento, gestión, operación y mantenimiento de toda clase de infraestructura deportiva, existente o por generarse, empleando los mecanismos de colaboración público privada previstos en la Ley General de Deporte, las leyes y disposiciones legales en materia de asociaciones público privadas, las iniciativas privadas, los proyectos de inversión de activos del Estado, las obras por impuestos, el Sistema de Bienes Estatales y cualquier otro mecanismo vigente; y,

c) Desplegar otros esfuerzos de colaboración conjunta para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación e inteligencia artificial dentro del marco de la transformación digital, así como desarrollar acciones orientadas a la implementación de laboratorios de tecnología y ciencias aplicadas a la práctica del fútbol.

3.3 Corresponde al Estado dictar las medidas de carácter reglamentario y complementario para que las organizaciones deportivas, atendiendo a la situación legal en que se encuentran, puedan:

a) Disponer por acuerdo de su asamblea de asociados su transformación a sociedades anónimas, siendo que en todos los casos deberán contar con un directorio que incluya la participación de auditores independientes e implementar en su estatuto todos los mecanismos de buen gobierno corporativo, de integridad, de cumplimiento y de gestión integral de riesgos;

b) Tratándose de organizaciones deportivas sometidas a procedimiento concursal, con excepción de las comprendidas en los alcances de la Ley 31279, la transformación es adoptada por la junta de acreedores, incorporando disposiciones que fomenten la participación institucional de los asociados; y,

c) Acogerse por única vez a un régimen especial de pago de las deudas tributarias y no tributarias en los términos que se detallan en el artículo 5 de la presente ley.

3.4 Para la adecuada evaluación, trámite, adjudicación, supervisión y ejecución de las propuestas de proyectos a que se refiere el literal b) del numeral 3.2 del artículo tercero, además de las modalidades contractuales previstas en el artículo 79 de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, las organizaciones deportivas podrán suscribir con el Instituto Peruano del Deporte, los gobiernos locales, gobiernos regionales y/o cualquier otra entidad pública que sea titular de los bienes, activos o derechos comprendidos en las citadas propuestas de proyecto, toda clase de contratos previstos en las leyes y disposiciones aplicables, tales como el arrendamiento, cesión en uso, compra venta directa o por subasta pública, concesión, permuta, usufructo o constitución de derecho de superficie, entre otros.

Para el caso de los activos y bienes muebles e inmuebles de propiedad del Estado respecto de los cuales se ejecuten los proyectos o se celebren los contratos antes mencionados, se dispone lo siguiente:

a) El solo mérito de la inscripción registral del pertinente contrato determinará la cancelación de todas las cargas y afectaciones que limiten el uso del bien o activo

correspondiente para los fines previstos en esta ley, en tanto su aprovechamiento y los ingresos generados se destinen a la sostenibilidad de la respectiva organización deportiva; y,

b) Los gobiernos locales y gobiernos regionales, así como a las entidades públicas a las que competa la emisión de opiniones, informes y/o títulos habilitantes, dispondrán su expedición con estricto cumplimiento de los plazos legales establecidos.

Artículo 4. Mecanismos para incentivar el desarrollo de inversiones en infraestructura deportiva

Para el desarrollo de infraestructura deportiva las organizaciones deportivas pueden acogerse a los mecanismos previstos en la presente ley y en otros instrumentos legales que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. Asimismo, pueden aplicar como fuente de financiamiento de infraestructura deportiva y cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias al mecanismo de obras por impuestos, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley 29230.

Artículo 5. Régimen Especial de Pago de las Obligaciones Tributarias y No Tributarias

5.1 El acogimiento al régimen especial regulado en esta disposición requiere como condición previa que las organizaciones deportivas acrediten el cumplimiento de las acciones que garanticen su sostenibilidad integral en el largo plazo, a través de un Plan de Viabilidad.

5.2 El acogimiento al régimen especial está condicionado a que la organización deportiva, ejecute las siguientes acciones:

a) Constituya el patrimonio deportivo, así como celebre el contrato de fideicomiso correspondiente;

b) Acompañe a su solicitud de acogimiento el contrato de constitución de su patrimonio deportivo, sus estados financieros auditados correspondientes al

ejercicio anual anterior a la fecha de acogimiento y la documentación que la acredite, en caso que corresponda su conversión a sociedad anónima, incluyendo la constancia de inscripción registral de dicho acto; y,

c) Acompañe a su solicitud de acogimiento el Plan de Viabilidad detallando las proyecciones económicas y financieras, el modelo de negocios, así como las actividades específicas y cronograma de ejecución que sustente el pago de las deudas materia de acogimiento; así como la constancia de inscripción registral en la que conste la aprobación, por parte de su máximo órgano de decisión, del referido plan.

5.3 Tanto el acuerdo por el que se apruebe la constitución del patrimonio deportivo, como el pertinente contrato de fideicomiso, deberán contener las disposiciones necesarias para facilitar la intervención económica y legal de la organización deportiva en el caso en que esta incumpla con el pago oportuno e integral de tres cuotas sucesivas de la deuda materia de acogimiento o de tres cuotas alternas; en ambos casos, dentro de un período de doce meses. Mediante resolución emitida por la SUNAT se fijará el alcance de esta disposición.

5.4 Las deudas materia de acogimiento comprenden, con carácter enunciativo, a todas las obligaciones correspondientes a la declaración y pago del Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto Predial y los arbitrios, tasas y contribuciones de las que sean titulares el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, así como a cualquier otra, incluso de carácter no tributario que se encuentre bajo administración de la SUNAT.

5.5 El acogimiento al régimen especial se regirá de acuerdo con lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria de la Ley 29504, Ley que promueve la transformación y participación de los clubes deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas abiertas, precisándose que:

a) La deuda materia de acogimiento a que se refiere en los numerales 1, 4 y 5 de la Segunda Disposición Transitoria de la Ley 29504 será toda aquella exigible al 31

de diciembre de 2020, incluyendo todas las multas e intereses, sea que provengan o no de cualquier aplazamiento o fraccionamiento, así como de cualquier declaración voluntaria formulada en el marco de la presente ley por la respectiva organización deportiva; y,

b) La tasa a que se refiere el numeral 6 de la Segunda Disposición Transitoria de la Ley 29504 será la tasa de interés moratorio (15% anual), siendo este el único interés aplicable por todo concepto, debiendo procederse al recálculo de tales deudas desde la fecha de su nacimiento.

Artículo 6. Medidas aplicables a las organizaciones deportivas en situación de Concurso a que se refiere la Ley 31279

6.1 Se prorroga por el lapso de sesenta (60) meses contados desde la fecha de publicación de la presente ley, la suspensión de la eficacia y efectos de las normas legales, así como el trámite de los siguientes procedimientos administrativos:

a) La Ley 29862, Ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, y la Ley 30064, Ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística, y sus respectivos reglamentos, salvo las disposiciones de estas normas cuya aplicación se disponga en la presente norma.

b) Los procedimientos concursales de las organizaciones deportivas a que se refiere la Ley 31279, incluyendo la convocatoria y realización de sus juntas de acreedores, la adopción y ejecución de toda clase de acuerdos por parte de dicho órgano y el ejercicio de las facultades y atribuciones que confiere la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal.

c) Asimismo, se prórroga el marco de protección del patrimonio del deudor a que se refiere el artículo 18° de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal.

6.2 La suspensión y prórrogas dispuestas en virtud del numeral 6.1 precedente tiene como objeto otorgar un marco de estabilidad jurídica e institucional dentro del cual corresponde al Administrador Provisional designado en cumplimiento de la Ley 31279 ejecutar las siguientes actividades:

a) Constituir el patrimonio deportivo y celebrar el pertinente contrato de fideicomiso, para cuyo fin podrá ejecutar todas las facultades inherentes al fideicomitente.

b) Gestione la emisión, por parte de una sociedad auditora de prestigio internacional, de un informe de auditoría de carácter forense que:

b.1 Determine las conductas y omisiones que a criterio de dicha entidad habrían impactado en la existencia, cuantía, legalidad y exigibilidad de las acreencias concursales y post concursales de la organización deportiva a su cargo.

b.2 Identifique los impactos causados a la organización deportiva, determinando su cuantía económica y financiera, así como su valor actual.

b.3 Formule el inventario de evidencias que acrediten las conductas, omisiones e impactos, antes indicados.

b.4 Lista de las responsabilidades legales que a su criterio deban exigirse, con indicación de las personas naturales o jurídicas, sea de derecho privado o público a las que estas competan y las acciones de índole legal a ser interpuestas.

b.5 Formule las conclusiones y recomendaciones que corresponda, incluyendo el listado de las acciones legales que a su criterio deban interponerse.

El plazo para la formulación de este informe es de ciento ochenta (180) días hábiles contados desde la fecha de publicación de la presente ley, debiendo ser

presentado ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República y a la SUNAT.

La fecha de presentación podrá ser prorrogada, hasta por una sola oportunidad por un plazo idéntico, mediante una solicitud debidamente fundamentada del Administrador Provisional a la SUNAT, entidad que deberá resolver en un plazo no mayor de 3 días hábiles la mencionada solicitud.

c) Formule el Plan de Viabilidad, incluyendo:

c.1 El modelo de negocios, incluyendo los planes de inversión, las proyecciones económicas y financieras y las fuentes de financiamiento.

c.2 Los informes de tasación y valorización que sustenten el Plan de Viabilidad, procurándose que los informes permitan, también, cumplir con los requisitos legales necesarios para implementar cualquier proceso de reorganización societaria, en caso este sea propuesto por el Administrador Provisional.

Tratándose de la tasación, esta debe ser practicada por un perito con registro vigente en el Registro de Peritos Tasadores. Así también tratándose de la valorización, esta debe ser efectuada por una entidad de prestigio internacional, inscrita ante la Superintendencia del Mercado de Valores.

Dichos informes deben ser ejecutados por una entidad auditora distinta a la que ejecute la auditoría a que se refiere el literal b) del inciso 5.2 del artículo quinto de la presente norma.

c.3 La estructura de la organización deportiva incluyendo, de ser el caso, el detalle de las unidades de negocios propuestas, la implementación de fórmulas de gerencia, concesión o uso de los activos comprendidos en su patrimonio deportivo; así como la fórmula de aporte, explotación o venta requerida para el desarrollo de estos, bajo cualquier fórmula legalmente viable, de los mismos.

c.4 Los códigos y procedimientos de buen gobierno corporativo, de cumplimiento y prevención y de gestión de riesgos.

c.5 Los informes preliminares sobre los instrumentos legales a ser requeridos para cada caso concreto:

c.5.1 La modificación parcial de estatutos, en el caso de optarse por el mantenimiento de la condición de asociación civil sin fines de lucro de la organización deportiva, incluyendo el listado de los derechos, atribuciones y obligaciones de los asociados, así como el procedimiento para la actualización del padrón y la afiliación y la desafiliación de los mismos.

c.5.2 El proyecto de reorganización societaria, en caso de que corresponda.

c.5.3 Los contratos y demás documentos necesarios para regular el funcionamiento de la organización deportiva, incluyendo los aplicables a sus entidades afiliadas.

c.6 La propuesta de pago de las acreencias concursales y post concursales, incluyendo la identificación de fuentes de financiamiento.

Cualquiera que sea su fuente, incluyendo la propuesta de una o más emisión de valores, aportes de capital, contratación de deuda o cualquier otra fuente, deberá acompañarse las hojas de términos esenciales de cada operación.

Ningún término o condición de pago a ser propuesto por el Administrador Provisional podrá vulnerar el orden de prelación establecido en la Ley 28709 ni otorgar un tratamiento discriminatorio a determinada acreencia respecto de las demás acreencias.

Se excluye expresamente de esta prohibición la propuesta de descuentos por aceleración de pagos, canje de las acreencias concursales y post concursales por bonos u otros instrumentos de crédito, en tanto sea de aplicación general a todos los créditos concursales y post concursales.

La propuesta debe contemplar el tratamiento a ser dispensado de los créditos contingentes, así como aquellos que como resultado de la auditoría forense o de las acciones legales a ser interpuestas en ejecución de lo previsto en el artículo sexto de la presente ley, pueden imputarse como no exigibles, extinguidos por haber operado su cancelación o compensación o tengan carácter fraudulento.

c.7 La identificación de los dispositivos o barreras burocráticas que, según sea el caso, condicionen el logro de los fines de la presente ley para cada caso concreto.

6.3 Durante el lapso de suspensión a que se refiere el numeral 5.1 de la presente ley, la SUNAT ejercerá la presidencia y representación legal de la junta de acreedores de las organizaciones deportivas en situación de concurso.

6.4 Aplicación del Plan de Viabilidad:

a) El Administrador Provisional remitirá a la SUNAT el proyecto de Plan de Viabilidad. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de su presentación, se procede con la publicación del referido plan en el portal institucional de la SUNAT y de la organización deportiva.

b) Los acreedores concursales y post concursales, así como cualquier persona con legítimo interés podrán formular aportes, comentarios y observaciones al plan dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde su publicación, para tal fin, tanto la SUNAT, como la organización deportiva, habilitarán un correo electrónico en su portal institucional respectivo.

c) Vencido dicho plazo, corresponderá al Administrador Provisional formular las modificaciones que sean pertinentes y remitir a la SUNAT la versión actualizada del mismo dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. La fecha de presentación podrá ser prorrogada por la SUNAT, por idéntico plazo, a petición del Administrador Provisional.

d) Una vez presentado, la SUNAT procederá con la revisión del Plan de Viabilidad, verificando que cumple con el contenido detallado en el literal c) del inciso 5.2 del artículo quinto de la presente Ley.

e) En caso de haberse incurrido en omisiones o errores, la SUNAT los comunicará al Administrador Provisional en un plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de su recepción, quien contará con idéntico plazo para subsanar tales omisiones o errores.

f) Desde el día siguiente de remitida la versión final del Plan de Viabilidad incluyendo la subsanación antes citada este quedará automáticamente aprobado, correspondiendo al Administrador Provisional proceder con su ejecución.

g) El Plan de Viabilidad deberá ser publicada en el plazo y forma indicada en el literal a) del inciso 5.4 del artículo quinto de la presente disposición.

6.5 El Administrador Provisional designado en el marco de la Ley 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, en cumplimiento de su encargo, ejercerá respecto de la organización deportiva todas las facultades y atribuciones inherentes al gerente general de una sociedad anónima, incluyendo aquellas de naturaleza bancaria, contractual, laboral, tributaria, administrativa o judicial, así como las necesarias para dar cumplimiento a los fines y objetivos detallados en los artículos primero y tercero de la presente ley, así como para la ejecución de los actos contemplados en el Plan de Viabilidad.

Dichas facultades incluyen, sin reserva ni limitación alguna, todas las facultades detalladas en el artículo 83.2 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, precisándose que no será de aplicación la establecida en el literal d) del citado artículo.

Consecuentemente, el Administrador Provisional puede celebrar con cualquier empresa del sistema bancario y financiero y cualquier inversionista institucional o no, los contratos que fuesen necesarios y transigir y realizar, con garantías o sin ellas, incluyendo la constitución, modificación y resolución de contratos de fideicomiso, incluyendo la transferencia a los mismos de bienes en dominio fiduciario y las operaciones de financiamiento necesarias para ejecutar el Plan de Viabilidad, con conocimiento de la junta de acreedores y de la SUNAT, en su condición de presidente de dicho órgano.

El cargo de Administrador Provisional concluye una vez verificada todas las actividades propuestas en el Plan de Viabilidad, incluyendo el pago directo, o mediante canje de instrumentos, de las acreencias concursales y post concursales.

Durante el ejercicio de su cargo el Administrador Provisional estará sujeto a los deberes, responsabilidades y sanciones legales imputables a la condición del gerente general, previstas en la Ley General de Sociedades.

6.6 Una vez entrado en vigencia, el Plan de Viabilidad, surtirá todos los efectos previstos en la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, respecto al Plan de Reestructuración, obligando con carácter universal a todos los acreedores de la organización deportiva. Durante su ejecución, se mantendrá vigente el marco de protección previsto en el artículo 18° de dicha norma legal.

Tendrá vigencia máxima de treinta (30) años. Sustituirá de pleno derecho y en todos sus efectos a cualquier Plan de Reestructuración previamente aprobado por la Junta de Acreedores.

Una vez entrado en vigencia, concluye la suspensión del trámite del procedimiento concursal de la organización deportiva, con excepción del trámite de todos aquellos

procedimientos administrativos a cargo del INDECOPI, relativos al reconocimiento e impugnación de créditos y de acuerdos de juntas de acreedores, incluyendo todos aquellos que pudieran interferir o dilatar la ejecución del Plan de Viabilidad.

La junta de acreedores podrá ser convocada y sesionar siguiendo las formalidades previstas en la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal.

La adopción de acuerdos, en especial aquellos que determinen la modificación del Plan de Viabilidad y la remoción del Administrador Provisional por transgresión de los deberes y responsabilidades establecidas en la presente ley, requieren el voto favorable, en primera convocatoria, del 80% de los créditos concursales reconocidos; y, en segunda convocatoria, el 80% de los créditos concursales asistentes.

La transferencia de toda clase de activos sea en dominio fiduciario, temporal o definitiva o a título gratuito u oneroso, bajo cualquier modalidad, efectuada en el marco de la ejecución del Plan de Viabilidad se realiza exclusivamente para atender los fines y objetivos previstos en el Plan de Viabilidad, con estricta observancia de los derechos de los acreedores laborales previstos en el artículo 66.4 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, y sujetándose a lo que fuera aplicable a las disposiciones contenidas en el Capítulo V de dicha norma.

En la transferencia de activos ejecutada en el marco del Plan de Viabilidad opera de manera automática la cancelación de todas las cargas, gravámenes, medidas cautelares y demás afectaciones, incluyendo todas aquellas generadas por mandato de ley o dispuestas por cualquier autoridad judicial, administrativa o por laudo arbitral.

Artículo 7. Intervención de la Contraloría General de la República

7.1 Una vez recibido el informe de auditoría a que se refiere el literal b) del numeral 6.2 del artículo 6 de la presente ley, corresponde a la Contraloría General de la República realizar las acciones de control para el cumplimiento de lo previsto en el artículo quinto de la Ley 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad

deportiva futbolística en el Perú, así como en todos los aspectos comprendidos en la presente ley, de acuerdo con el alcance sus competencias.

7.2 La Contraloría General de la República ejerce todas las facultades previstas en las normas y procedimientos que conforman el Sistema Nacional de Control a fin de recibir e investigar cualquier denuncia con relación a los actos de abuso de derecho o fraude de la ley, sea que presuntamente hubieran ocurrido en sede administrativa o judicial respecto de los procedimientos concursales instaurados a partir de la dación del Decreto de Urgencia 010-2012, Medidas de Urgencia para la reestructuración y apoyo de emergencia a la actividad deportivo futbolística, y demás sustitutorias y conexas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Excepciones al procedimiento concursal

Los fondos, fideicomisos, patrimonios autónomos y/o sociedades a ser creadas al amparo de la presente ley por cualquier organización deportiva no se encuentran sometidas a procedimiento concursal. Se exceptúa el supuesto en que cualquiera de ellos incurra nuevamente en causal de sometimiento a procedimiento concursal posteriormente.

SEGUNDA. Desarrollo inmobiliario y utilización de ingresos generados por terreno fiscal adjudicado a organización deportiva

Se precisa que el inmueble a que se refiere el artículo 2 de la Ley 10191, regirá su desarrollo inmobiliario bajo la fórmula prevista en el pertinente plan de viabilidad y en conformidad con el destino establecido en dicha norma legal. Para tales fines, será responsabilidad de la respectiva Organización Deportiva destinar los flujos de ingresos que se generen en virtud de tal desarrollo al cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, incluyendo la obtención del financiamiento requerido para la cancelación de los créditos concursales y post concursales.

TERCERA. Reglamentación

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de treinta (30) días naturales contados a partir de la vigencia de la presente ley.

CUARTA. Glosario de Términos

a) **CONMEBOL:** Es la Confederación Sudamericana de Fútbol.

b) **Fideicomiso:** Es la relación jurídica definida en el artículo 241 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y demás sustitutorias y conexas.

c) **FIFA:** Es la Federación Internacional de Fútbol Asociado a cargo del gobierno de las federaciones nacionales de fútbol.

d) **Normas Deportivas:** Son todas las regulaciones de carácter legal, general y vinculante emitidas por la FIFA, la CONMEBOL, la FPF.

e) **Patrimonio Deportivo:** Es la totalidad de los bienes de titularidad de la organización deportiva, tangibles e intangibles, incluyendo todos y cada uno de sus derechos asociativos y franquicia deportiva. Por aplicación de la presente ley, dichos bienes son aportados a un fideicomiso, bajo administración de una entidad fiduciaria debidamente autorizada por el Estado. Su conservación y explotación se rige por lo dispuesto en las normas deportivas, el estatuto de la organización deportiva, su plan de viabilidad y el pertinente contrato de fideicomiso, así como por las leyes y demás disposiciones legales vigentes en el país.

f) **Plan de Viabilidad:** Es el documento propuesto por el Administrador Provisional o, por el órgano autorizado de las demás organizaciones deportivas cuyo contenido mínimo es el consignado en el literal c) del inciso 5.2 del artículo quinto de la presente Ley, teniendo por objeto viabilizar el pago de las acreencias concursales y post concursales y garantizar la sostenibilidad de la organización deportiva de la que se trate. Tendrá una vigencia máxima de treinta (30) años calendarios. El plazo podrá ser inferior, sujeto a que se acredite que dentro del mismo se cancelarán íntegramente las acreencias concursales y post concursales del deudor, sin comprometer su sostenibilidad.

g) **Reorganización Societaria:** Es cualquier proceso de modificación de la denominación, tipo de sociedad y asignación de los activos y pasivos de la organización deportiva, incluyendo su transformación, fusión y reorganización simple o mediante escisiones múltiples según lo regulado en el artículo 333 y siguientes de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, y que se lleve a cabo para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos en la presente ley. Incluye el supuesto en el que la organización deportiva, manteniendo su condición de asociación civil de responsabilidad limitada, constituya en forma directa o a través de su Patrimonio Deportivo, una o más sociedades anónimas de propósito especial para la explotación de sus activos.

h) **SUNAT:** Es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.

Salvo mejor parecer.
Dese cuenta.
Sala de la Comisión.

Lima, 2 de noviembre de 2022.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 11:15:47-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/11/2022 12:34:11-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GONZALES DELGADO Diana Carolina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/11/2022 11:01:26-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ZEBALLOS MADARIAGA Carlos Javier FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/11/2022 17:14:26-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: FLORES RUIZ Victor Seferino FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/11/2022 11:13:50-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ACUÑA PERALTA Maria Grimaneza FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/11/2022 15:22:53-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/11/2022 15:14:45-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LIZARZABURU LIZARZABURU Juan Carlos Martin FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/11/2022 15:06:12-0500

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1137/2021-CR, que propone la "Ley de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol".

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: JERI ORE Jose Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 18:43:42-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 11:41:49-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: MONTALVO CUBAS SEGUNDO TORIBIO FIR 16655831 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 17:24:58-0500

Lima, 14 de noviembre de 2022

OFICIO Nº 580-2021-2026-DC-RTS/CR

Señora:
ROSANGELLA BARBARAN REYES
Presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera

Lima. -

Asunto: **Imposibilidad de firma digital por problemas con el Certificado digital RENIEC.**

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, e informarle que la Congresista **Rosio Torres Salinas** titular de la Comisión, no puede firmar digitalmente los Dictámenes aprobados por la Comisión, por cuanto hasta la fecha RENIEC no ha enviado la autorización del Certificado Digital, habiendo recibido la información vía correo que el trámite se dará dentro de tres días hábiles.

Sin otro particular, me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

Jesús Humberto SIERRA TAPIA
Asesor Principal

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA (CEBFIF)

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

ACTA DE LA SÉTIMA SESIÓN ORDINARIA
(SESIÓN SEMIPRESENCIAL)
MIÉRCOLES, 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

Siendo las 9 horas y 44 minutos del miércoles 02 de noviembre de 2022, a través de la plataforma Microsoft Teams/Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, se reunieron los miembros de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (CEBFIF), para realizar la Sétima Sesión Ordinaria de la Comisión, bajo la presidencia de la Señora Congresista Rosangella Andrea Barbarán Reyes, quien dio la bienvenida a los señores congresistas y dispuso la verificación del quorum para iniciar la sesión.

Se encontraban presentes los señores congresistas miembros titulares, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Guido Bellido Ugarte, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Ceferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Silvia María Monteza Facho, Juan Carlos Mori Celis, María Grimaneza Acuña Peralta, Rosio Torres Salinas, Álex Antonio Paredes Gonzales, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, Isabel Cortez Aguirre, José Enrique Jerí Oré, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Carlos Antonio Anderson Ramírez. Asimismo, se encontraba presente la Señora Congresista miembro accesitario Diana Carolina Gonzales Delgado. Justificaron su inasistencia los señores congresistas Alejandro Enrique Cavero Alva, Betssy Betzabet Chávez Chino y José León Luna Gálvez.

Con el quórum de Reglamento se dio inicio a la Sétima Sesión Ordinaria.

APROBACIÓN DE ACTA

La Presidenta puso en observación el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, de fecha 19 de octubre de 2022, siendo aprobada.

DESPACHO

La Presidenta dio cuenta de los documentos recibidos y emitidos por la Comisión cuyos cuadros habían sido repartidos junto con la Agenda para la presente sesión. Señaló que si alguno de los señores Congresistas requiriera copia de alguno de los documentos allí consignados puede solicitarla a la Secretaría Técnica.

Asimismo, se dio cuenta de los proyectos de ley ingresados para estudio y dictamen de la Comisión cuyo cuadro había sido repartido junto con la Agenda para la presente sesión.

INFORMES

No hubo informes.

PEDIDOS

La Presidencia hizo un pedido para ampliar la agenda con la finalidad de incorporar la sustentación del Proyecto de Ley 1921/2021-CR, que propone la "Ley que destina al fondo educativo del Callao el 20% de los recursos proveniente de la participación en renta de aduana" a cargo de la Congresista Noelia Rossvith Herrera Medina. Este pedido pasó al Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta señaló que se encontraba programada en el primer punto del Orden del Día de la presente sesión la sustentación del Proyecto de Ley 2065/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Democrático, a iniciativa del Congresista Luis Roberto Kamiche Morante, que propone la "Ley que dispone la devolución del 100% de saldos de aportes previsionales a los aportantes y ex aportantes del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), mayores de 40 años de edad".

El Señor Congresista Luis Roberto Kamiche Morante señaló que el objeto de la norma es la devolución del 100% de aportes previsionales a los aportantes y ex aportantes del sistema privado de administración de fondos de pensiones, mayores de 40 años de edad. Señaló, asimismo, que considerando el monto de sus aportes, el retiro que han hecho de los mismos en los dos últimos años, la dificultad para conseguir un empleo para seguir aportando al sistema previsional y la actual crisis económica que se sigue profundizando, la situación de los aportantes y no aportantes mayores de 40 años es totalmente crítica y debe ser atendida con prioridad. Agregó que resultaría un acto de injusticia negarles este derecho facultativo de acceder a sus fondos, con el argumento que "los ahorros garantizan el bienestar en su vejez" cuando todos sabemos que el monto de aportes que poseen, la dificultad de conseguir empleo después de los 40 años para seguir aportando y la disminución sistemática del valor de sus ahorros; harán imposible que los aportantes que ahora son mayores de 40 años reciban una pensión de jubilación que les permita siquiera "sobrevivir". Señaló también que la propuesta pretende beneficiar socialmente a los titulares de las cuentas individuales de capitalización de fondos de pensiones de aportantes y ex aportantes mayores de 40 años que, considerando la cantidad de aportes que poseen y la dificultad que existe para que accedan a un empleo que les permita seguir aportando; están prácticamente condenados a esperar largos años para recibir como pensión montos irrisorios o a perderlos con el transcurrir de los años por efecto de la disminución del valor de los aportes.

A continuación, la Presidenta señaló que se encontraba programado en el segundo punto del Orden del Día de la presente sesión el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2259/2021-CR, que propone la "Ley de Nacionalización del cobre y creación de la empresa Nacional Las Bambas SAC", y que recomienda su no aprobación y envío al archivo.

La Presidenta señaló que la propuesta tiene por objeto normar la explotación de los recursos cupríferos existentes en el territorio nacional con la finalidad de garantizar la propiedad nacional sobre el cobre en estado natural en el subsuelo, el reconocimiento de su valor económico, optimizar la distribución de la riqueza que su explotación genera e impulsar el desarrollo nacional desde el interior del país. Señaló, asimismo, que trasladar la explotación del cobre del sector privado al sector público podría significar la reducción de producción de cobre, la reducción en recaudación que percibe el Tesoro Público, menores transferencias de recursos para los Gobiernos Regionales y Locales, lo cual impactaría en una mayor brecha de servicios públicos para la población y perjudica el desarrollo del país. Agregó que la iniciativa legislativa busca crear la Corporación Nacional del Cobre y la Empresa Nacional Las Bambas SAC para explorar y explotar cobre en el país y en comunidades de la provincia de Cotabambas, respectivamente.

La Presidenta dijo que el artículo 60 de la Constitución establece que sólo por ley expresa es posible crear empresas del Estado, pero cuando dicha participación estatal tenga carácter subsidiario, es decir, que el Estado podría crear empresas públicas para atender sectores sociales o económicos que no reciben atención por parte de las empresas privadas; sin embargo, este no es el caso del sector minero, dado que su desarrollo histórico en el país se fundamenta en la inversión de empresas que exploran y explotan recursos naturales.

La Presidenta señaló, asimismo, que según el artículo 66 de la Constitución los recursos naturales son patrimonio de la Nación y dispone que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión entregada otorga a su titular un derecho real. Agregó que, en la misma línea, el artículo 4 de la Ley 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, establece que los recursos naturales son Patrimonio de la Nación; sin embargo, los frutos y productos son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos. Dijo que, en ese sentido, el proyecto de ley vulnera la libertad de iniciativa privada al tratar de trasgredir los derechos reales otorgados a los inversionistas a través de las concesiones, al no respetar los contratos ni mecanismos de mercado para atraer inversión al país.

La Presidenta dijo que el artículo 70 de la Constitución señala que "el derecho de la propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. Añadió que, además, "a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio". Dijo que en la iniciativa legislativa, lo referido al control de la explotación del cobre, es un acto de expropiación que no se alcanza a justificar por razones de seguridad o necesidad pública.

La Presidenta dijo también que el artículo 10 de la iniciativa legislativa, que establece la valorización de las empresas privadas en operaciones y que serían expropiadas, el planteamiento no corresponde a un cálculo económico adecuado pues no refleja el valor presente esperado de los flujos futuros para los inversionistas. Agregó que dicho artículo también considera la deducción de "exportación de utilidades" y el "valor del recurso en el subsuelo que ha omitido pagar", ambos conceptos carecen de sustento técnico debido al régimen de libre movilidad de capitales en el que nos encontramos. Dijo que tampoco toma en consideración las regalías que se han pagado al Estado por la extracción de los recursos. Dijo, asimismo, que, en síntesis, la propuesta no ofrecería un justiprecio por la expropiación de las empresas mineras. Señaló además que la propuesta establece que el Estado deberá asignar del Fondo de Contingencias del Presupuesto del año Fiscal 2022 hasta S/ 3 000 millones como aporte estatal para ser distribuidos entre las unidades

empresariales. Sin embargo, según el artículo 79 de la Constitución, el Congreso de la República no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos.

La Presidenta señaló que, por último, históricamente se ha podido visibilizar que las empresas estatales constituyeron las principales fuentes del desorden fiscal en el país, generando grandes pérdidas para el fisco e ineficiencia en los mercados, llevando al país a niveles de hiperinflación y recesión económica sin precedentes. Dijo que solamente el pago del justiprecio por la expropiación de las empresas que actualmente se encuentran en operación le costaría al país miles de millones de dólares, costo que no es analizado en la propuesta. Agregó que tampoco se fundamenta las fuentes de financiamiento del mismo y que actualmente el país se encuentra en un contexto post pandemia caracterizado por un bajo crecimiento económico y altos niveles de inflación. Dijo que, en ese sentido, es de necesidad atraer y promover inversiones hacia el país, así como un manejo adecuado de las cuentas fiscales y no lo contrario.

La Presidenta señaló, finalmente, que el proyecto de ley había recibido opiniones negativas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

La Presidenta puso al voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2259/2021-CR, que propone la "Ley de Nacionalización del cobre y creación de la empresa Nacional Las Bambas SAC", y que recomienda su no aprobación y envío al archivo; fue aprobado por mayoría; con catorce (14) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Juan Carlos Mori Celis, Silvia María Monteza Facho, María Grimaneza Acuña Peralta, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, José Enrique Jerí Oré, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Carlos Antonio Anderson Ramírez; cuatro (04) en contra, de los señores congresistas Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Alex Antonio Paredes Gonzales, Germán Adolfo Tacuri Valdivia e Isabel Cortez Aguirre; y tres (03) abstenciones, de los señores congresistas Guido Bellido Ugarte, Segundo Toribio Montalvo Cubas y Rosio Torres Salinas.

Seguidamente, la Presidenta señaló que se encontraba programado en el tercer punto del Orden del Día de la presente sesión el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 596/2021-CR, que propone la "Ley que modifica la Ley 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional".

La Presidenta señaló que el presente dictamen tiene por objeto: i) Modificar los artículos 1 y 4 de la Ley 27889, a fin que el Fondo incluya el "fortalecimiento de la diversidad cultural" (artículo 1); y, ii) Incluir al Ministerio de Cultura en el Comité Especial encargado de proponer al MINCETUR el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional (artículo 2), y velar de ese modo por nuestra diversidad cultural, la protección, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación, en las actividades y proyectos destinados a la promoción y desarrollo del turismo nacional que se pretendan efectuar. Señaló, asimismo que, la incorporación del término "Fortalecimiento de la Diversidad Cultural", es importante debido a que se encuentra enmarcado con la Política Nacional de Cultura al 2030. Agregó que, en efecto, el Perú es un país pluricultural y multiétnico que alberga a lo largo de su territorio un sinnúmero de manifestaciones culturales ancestrales y contemporáneas, emanadas de la creatividad individual y/o colectiva y de la multiplicidad e interacción de los grupos culturales que coexisten en nuestra sociedad. Prueba de ello es nuestro vasto patrimonio cultural, nuestra diversidad

de expresiones artístico-culturales, nuestras industrias culturales, y nuestra heterogeneidad étnica de individuos y colectivos.

La Presidenta agregó que, respecto a incorporar al Ministerio de Cultura en el Comité Especial encargado de proponer el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo 005-2013-MC; el Ministerio de Cultura es competente en materia de cultura a lo largo del territorio nacional, comprende al Sector Cultura, constituyéndose en su ente rector. Dijo que, en consecuencia, es pertinente su participación en lo que comprende la Ley 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional, como parte integrante del Comité Especial para proponer el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional.

La Presidenta señaló, finalmente, que mediante la Primera Disposición Final de la Ley 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, se estableció un plazo de aplicación de 10 años. Este plazo fue ampliado por 10 años más mediante la Ley 29796. Por ello, habiéndose advertido la necesidad de ampliación de la vigencia de la Ley 27889 modificada por la Ley 29796, es oportuna la modificación de la Ley 29796, debiendo ser modificada para que la vigencia de la Ley 27889 sea de 20 años; conforme a la recomendación planteada por el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales a través del Proveído 000155-2022-VMPCIC/MC que remite el Informe 000004-2022-DGDP/MC de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.

Puesto al voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 596/2021-CR, que propone la "Ley que modifica la Ley 27889, Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional"; fue aprobado por mayoría; con diecisiete (17) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Juan Carlos Mori Celis, Silvia María Monteza Facho, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, Isabel Cortez Aguirre, José Enrique Jerí Oré, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Carlos Antonio Anderson Ramírez; uno (01) en contra, del Señor Congresista Guido Bellido Ugarte; y tres (03) abstenciones, de los señores congresistas Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Alex Antonio Paredes Gonzales y Germán Adolfo Tacuri Valdivia.

A continuación, la Presidenta señaló que se encontraba programada en el cuarto punto del Orden del Día de la presente sesión el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1137/2021-CR, que propone la "Ley de las Organizaciones Deportivas dedicadas a la práctica del fútbol".

La Presidenta señaló que el dictamen propone la Ley de fortalecimiento de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol y tiene por objeto establecer las medidas necesarias para fortalecer a las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol profesional, procurar el acceso a la inversión privada y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones deportivas. Dijo que, asimismo, se propone dar el marco legal necesario a fin de que las organizaciones deportivas logren su sostenibilidad integral, así como establecer las reglas necesarias para viabilizar el pago y concluir satisfactoriamente los procesos concursales y post concursales, en condiciones de equidad, para todos los acreedores.

La Presidenta señaló que la propuesta legislativa define, en primer lugar, el sentido de la sostenibilidad de las organizaciones deportivas, que plantea, estableciendo en su artículo 3 la necesidad de promover la canalización de la inversión privada en el mejoramiento, ampliación y creación de la infraestructura deportiva de titularidad pública mediante esquemas legales de colaboración pública, esperando mejorar la competitividad del futbol profesional a nivel nacional e internacional, generando una serie de impactos en diversas actividades económicas asociadas directa e indirectamente con dicha disciplina, produciendo un aumento en la recaudación de los tributos generados a favor del Estado. Agregó que, en ese sentido, se permite que las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol adopten formas societarias que otorguen garantías adecuadas para su fortalecimiento patrimonial, permitiendo que las inversiones sean realizadas en su infraestructura, la formación de menores, los laboratorios de tecnología y ciencias aplicadas y el pago de sus costos y los gastos de operación debidamente gestionados a través de estructuras transparentes, sujetas a las normas del buen gobierno corporativo, de integridad y de cumplimiento.

La Presidenta agregó que, en segundo lugar, en el artículo 4 del texto normativo propuesto, se propone mejorar la capacidad de inversión de las organizaciones deportivas, abriendo la posibilidad de manera explícita, a que estas puedan realizar inversiones en infraestructura, en el marco de la normatividad vigente relativa a concesiones y obras por impuestos, con el doble impacto, benéfico, en este último caso, pues la norma se orienta a fomentar la inversión directa en infraestructura deportiva y a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario y no tributario que puedan generar las actividades de dichas organizaciones.

La Presidenta dijo que, en tercer lugar, en su artículo 5, se establece un Régimen Especial de Pago de las Obligaciones Tributarias y No Tributarias y para ello se propone el acogimiento al régimen especial regulado en la iniciativa legislativa, requiriendo como condición previa que las organizaciones deportivas acrediten el cumplimiento de las acciones que garanticen su sostenibilidad integral en el largo plazo, a través de un Plan de Viabilidad. Agregó que las deudas materia de acogimiento comprenden, con carácter enunciativo, a todas las obligaciones correspondientes a la declaración y pago del Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto Predial y los arbitrios, tasas y contribuciones de las que sean titulares el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, así como a cualquier otra, incluso de carácter no tributario que se encuentre bajo administración de la SUNAT.

La Presidenta señaló también que, un cuarto conjunto de disposiciones establecidas en el artículo 6, señalan medidas aplicables a las Organizaciones Deportivas en situación de Concurso a que se refiere la Ley 31279, es decir respecto a la "Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú". Entre las cuales se contemplan, la suspensión de normas legales y de procedimientos administrativos, actividades a ser ejecutadas durante el período de suspensión. Añadió que, con ello, la presente norma permitiría concluir con una serie de acciones administrativas y judiciales cuyos costos e impactos han sido notoriamente perjudiciales para todos los actores involucrados en la práctica del fútbol profesional, los cuales han venido irrogando considerables recursos al Estado y a los órganos de administración de justicia.

La Presidenta agregó que, finalmente, en el artículo 7 del texto normativo propuesto, se establece que la una vez recibido el informe de auditoría a que se refiere el literal b) del inciso 6.2 del artículo 6, corresponde a la Contraloría General de la República realizar las acciones de control para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en

el Perú, respecto de presuntas irregularidades en los procedimientos concursales seguidos a los clubes de fútbol profesional, así como en todos los aspectos comprendidos en la presente norma, de acuerdo con el alcance de las competencias de la máxima autoridad de control.

Puesto al voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1137/2021-CR, que propone la "Ley de las Organizaciones Deportivas dedicadas a la práctica del fútbol", fue aprobado por mayoría; con once (11) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, José Enrique Jerí Oré, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Diana Carolina Gonzales Delgado, en calidad de accesitaria de Alejandro Enrique Cavero Alva; seis (06) en contra, de los señores congresistas Guido Bellido Ugarte, Tania Estefany Ramírez García, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Jorge Carlos Montoya Manriquey, Isabel Cortez Aguirre y Carlos Antonio Anderson Ramírez; y cuatro (04) abstenciones, de los señores congresistas Juan Carlos Mori Celis, Silvia María Monteza Facho, Germán Adolfo Tacuri Valdivia y Noelia Rossvith Herrera Medina.

A continuación, la Presidenta señaló que se encontraba programado en el quinto punto del Orden del Día de la presente sesión el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3195/2022-PE, que propone la "Ley que prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624".

La Presidenta señaló que la propuesta tiene por objeto prorrogar la vigencia de la Ley 27623, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración, y la Ley 27624, Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración de hidrocarburos; a fin de promover la exploración en las actividades mineras y de hidrocarburos y así propiciar el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Agregó que históricamente la actividad minera y de hidrocarburos ha sido de gran relevancia en el crecimiento económico del país; principalmente, a través de la producción, exportaciones, generación de empleo y generación de recursos para el Tesoro Público. Dijo que, no obstante, en los últimos años se aprecia la reducción de las inversiones en exploraciones en ambas actividades, así como el descenso en el Índice Fraser de atractivo para invertir. Agregó que, en efecto, para el 2021, el Índice Fraser de atractivo para invertir posiciona al Perú en el puesto 42 de 84 ciudades y países incluidos en la comparativa.

La Presidenta señaló, asimismo, que en la actualidad el Perú se encuentra en un contexto post pandemia caracterizado por un bajo crecimiento económico y altos niveles de inflación. Dijo, además, que las proyecciones de crecimiento a nivel mundial y local siguen reduciéndose para los próximos años y, en ese sentido, es necesario seguir promoviendo la inversión en el país de manera que la dinámica económica producida por las actividades de minería e hidrocarburos puedan generar empleo y recursos para seguir desarrollando el país. Dijo que, en atención a lo expuesto, con el objetivo de impulsar el gasto privado y la recuperación de la confianza de los agentes económicos, el dictamen plantea una medida que promueve un entorno favorable para el desarrollo de inversiones e impulsa la reactivación de la economía, incluyendo mecanismos de alivio tributario orientados a fomentar la inversión privada.

La Presidenta señaló, finalmente, que estando fijado el vencimiento de la vigencia de los beneficios tributarios de las Leyes 27623 y 27624 para el 31 de diciembre de 2022 conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia 021-2019 y, considerando que la

eliminación de los mismos sería sumamente perjudiciales en la medida que afectarían el desarrollo de más proyectos mineros y de hidrocarburos e implicarían la pérdida de los ingresos provenientes de estas actividades, la Comisión encuentra conveniente y necesaria la prórroga de la vigencia de las leyes que permita asegurar la continuidad de las operaciones en mención.

Luego del debate la Presidenta recogió la propuesta de prorrogar la vigencia de las Leyes 27623 y 27624 hasta el 31 de diciembre de 2027. Puesto al voto el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3195/2022-PE, que propone la "Ley que prorroga la vigencia de las Leyes 27623 y 27624", fue aprobado por mayoría; con dieciséis (16) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Juan Carlos Mori Celis, Silvia María Monteza Facho, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, José Enrique Jerí Oré, Carlos Antonio Anderson Ramírez y Diana Carolina Gonzales Delgado, en calidad de accesitaria de Alejandro Enrique Cavero Alva; uno (01) en contra, de la Señora Congresista Isabel Cortez Aguirre; y cuatro (04) abstenciones, de los señores congresistas Guido Bellido Ugarte, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Germán Adolfo Tacuri Valdivia y Carlos Javier Zeballos Madariaga.

A continuación, la Presidenta señaló que se encontraba programada en el sexto punto del Orden del Día de la presente sesión la sustentación del Proyecto de Ley 1755/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista Ilich Fredy López Ureña, que propone la "Ley que modifica el Decreto de Urgencia 037-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias complementarias en materia económica y financiera orientadas al fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas, respecto del fortalecimiento patrimonial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito".

El Señor Congresista Ilich Fredy López Ureña señaló que la finalidad de la iniciativa es el fortalecimiento patrimonial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito mediante una transferencia excepcional y por única vez, de recursos en el marco del numeral 5.3. del artículo 5 del Decreto de Urgencia 037-2021 destinados exclusivamente para aporte de capital. Agregó que se plantea la creación del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas. Señaló, asimismo, que el costo es el 70% de los recursos del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Microfinancieras y que los beneficios son i) El fortalecimiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito como herramienta y brazo financiero del Estado, fomentando su crecimiento y sostenibilidad; ii) El impulso al crédito a las MYPES y sectores vulnerables; iii) La reducción de los niveles de pobreza teniendo como vehículo la inclusión financiera; iv) La mejora de la clasificación de riego de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, permitiéndoles acceder a líneas de crédito con menores tasas de interés, en beneficio de sus clientes; y, v) El contar con nuevos recursos de liquidez para apoyar la recuperación económica a través del financiamiento a la MYPES y tener una mayor cobertura para atender a los clientes potenciales. Añadió que la presente iniciativa no genera mayores gastos al erario nacional, ya que, el programa de fortalecimiento patrimonial cuenta con fuente de financiamiento.

Seguidamente, la Presidenta señaló que se encontraba programado en el sétimo punto del Orden del Día de la presente sesión el pedido para ampliar la agenda con la finalidad de incorporar la sustentación del Proyecto de Ley 1921/2021-CR, que propone la "Ley que destina al fondo educativo del Callao el 20 por ciento de los recursos proveniente de la

participación en renta de aduana" a cargo de la Congresista Noelia Rossvith Herrera Medina.

Puesto al voto el pedido de ampliación de agenda, fue aprobado por unanimidad con diecinueve (19) votos a favor; de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Guido Bellido Ugarte, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Ceferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Tania Estefany Ramírez García, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Silvia María Monteza Facho, Juan Carlos Mori Celis, María Grimaneza Acuña Peralta, Rosio Torres Salinas, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, Isabel Cortez Aguirre, José Enrique Jerí Oré, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Carlos Antonio Anderson Ramírez.

A continuación, la Presidenta cedió el uso de la palabra a la Señora Congresista Noelia Rossvith Herrera Medina, quien señaló que la presente iniciativa tiene por objeto incrementar el monto de los recursos que se destinan al Fondo Educativo del Callao, provenientes de la Participación en Renta de Aduanas. Señaló, asimismo, que para tal efecto se plantea modificar el artículo único de la Ley 30915, Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 27613, Ley de Participación en Renta de Aduanas, modificado por el artículo 1 de la Ley 30578, ampliando el factor correspondiente al Fondo Educativo del Callao-CAFED del 10% al 20%.

Agregó que la presente iniciativa modifica los términos de la Ley 27613, guardando concordancia con otros dispositivos como la Ley 30878, en concordancia con el Decreto Supremo 164-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la política general del gobierno para el periodo 2021 -2026, en especial el Eje 3, sobre impulso de la ciencia, tecnología e innovación; y el Eje 4, sobre fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes. Señaló también que la iniciativa legislativa no irroga gasto al erario nacional en tanto que no se crea un nuevo tributo, sino representa el cambio en la distribución del gasto del Gobierno Regional del Callao al Fondo Educativo del Callao donde se verán beneficiados un estimado de 180,000 alumnos de la escuela pública del Callao y aproximadamente 15,000 estudiantes de educación superior universitaria, creando nuevas oportunidades a los jóvenes chalacos, al fortalecer la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad y el desarrollo del capital humano en la Región Callao.

Finalmente, la Presidenta solicitó la dispensa del trámite de aprobación del Acta para ejecutar los acuerdos tratados en la sesión, siendo aprobada.

Siendo las 13 horas y 49 minutos, se levantó la sesión.

Se deja constancia de que se considera parte integrante de la presente Acta la transcripción de la versión magnetofónica de la sesión.

Rosangella Andrea Barbarán Reyes
Presidenta

Ilich Fredy López Ureña
Secretario

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 19:19:32-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 10:34:12-0500